

EDITORIAL

DOS AÑOS MAS DE GOBIERNO DE DUARTE

*Tras el primer año de la actual gestión presidencial del Inge-
niero José Napoleón Duarte, ECA expresó editorialmente su
grave preocupación ya que, si bien el gobierno había logrado al-
gunos avances apreciables, no había progresado significativa-
mente en la resolución de los problemas fundamentales del país.
La causa primordial de este fracaso había que atribuirlo a la fal-
ta de poder real de Duarte quien, más que atender a las necesida-
des de los salvadoreños, se había guiado por las exigencias nor-
teamericanas y, más que buscar una respuesta a los intereses na-
cionales, se había constituido en gerente de los intereses de la ad-
ministración Reagan. El primero de junio se cumplió un año
más de gobierno de Duarte, y es preciso volver a examinar su de-
sempeño a fin de ponderar si se han dado progresos o retroce-
sos, si se han afianzado los avances o si se han corregido los
errores y, sobre todo, evaluar si se han puesto principios de solu-
ción a los graves problemas del país.*

1. La autoevaluación gubernamental

*El informe presidencial presentado por el Ing. Duarte el pri-
mero de junio ante la Asamblea Legislativa constituye un largo
esfuerzo para demostrar que su gobierno si ha logrado durante
estos dos años avances significativos en la resolución de la crisis
del país.*

*Duarte comienza con una distinción entre el conflicto,
causado por "la usencia de pluralismo político, la presencia de
injustas condiciones socio-económicas y la negación de los de-*



rechos fundamentales del pueblo,” y la guerra, “que nos ha sido impuesta con la ayuda y patrocinio de los gobiernos marxistas de Rusia (sic), Cuba y Nicaragua.” Esta distinción le lleva a plantear el dilema de El Salvador y de Centroamérica como la opción entre democracia y totalitarismo, y a conceptualizar su gobierno como uno “de transición, de consolidación, entre la dictadura oligárquica de los últimos cincuenta años y la democracia dinámica.” Por ello, estima Duarte que el gran logro político de sus dos años de gestión es haber provocado la crisis de las ofertas totalitarias de izquierda y derecha, mientras alcanzaba para su gobierno una triple legitimidad, de origen, de práctica y de “destino histórico,” mediante “la vivencia de la democracia” y el ejercicio irrestricto de las libertades.

En el ámbito social, Duarte enumera “las impresionantes realizaciones concretas” de su gobierno frente al esquema de desobediencia e ilegalidad generalizada que se expresa en las acciones destructivas de los escuadrones de la muerte, por un lado, y de la “ultraizquierda,” por otro. Los más significativos de estos logros serían: la realización de 3.780 proyectos físicos, la construcción de 65.000 unidades habitacionales, el apoyo a la Reforma Agraria, la rehabilitación de servicios públicos, y otros diversos programas educativos y de salud, como las cinco campañas de vacunación infantil. En el ámbito económico, Duarte señala que “en 1985 el producto interno bruto continuó su alza y la tasa positiva de crecimiento fue de 1.6 por ciento y todos los sectores de la economía crecieron.” Mediante el “programa de estabilización y reactivación económica,” el gobierno ha pretendido lograr una efectiva reactivación que cristalizaría en 1988. Internacionalmente, El Salvador ha conseguido en estos dos años, según Duarte, “reconocimiento y legitimidad,” es decir,

“una nueva imagen.” Tras señalar el fortalecimiento de la Fuerza Armada y los problemas aún pendientes de la corrupción y de las deficiencias en la administración de la justicia, así como la responsabilidad de los medios de comunicación masiva, Duarte reconoce la persistencia de la guerra y termina con su llamamiento a una tercera reunión de diálogo con los insurgentes.

Prescindiendo por ahora de un análisis más sustantivo de las realizaciones de su gobierno, cabe hacer cuando menos tres importantes observaciones al discurso de Duarte: (a) en sentido estricto no constituye un simple informe de labores, ya que lo que presenta en varios rubros no son datos o realizaciones, sino proyecciones, intenciones y aun simples deseos (“ampliaremos,” “impulsaremos”); (b) la presentación de los datos es poco clara, como cuando se mezclan obras de la más diversa naturaleza y magnitud, desde el arreglo de una llave de agua hasta la reparación de un puente, a fin de lograr un total “impresionante,” o como cuando se ofrecen cifras fuera de su contexto, por ejemplo, al aludir al incremento del salario de los trabajadores públicos sin mencionar la devaluación real de la moneda durante el mismo período; (c) se escamotea el papel de Estados Unidos, al que no se menciona ni una sola vez en el discurso, ni siquiera en el contexto de la confrontación o de la política internacional. Esta última omisión resulta tan discordante respecto al proceder cotidiano del gobierno de Duarte, que obviamente no puede considerarse una omisión casual y, por tanto, tiene que tomarse como una de las claves interpretativas no sólo del discurso sino del desempeño gubernamental en estos dos años.

2. La evaluación de ARENA y de la UNTS

Fuera del informe presidencial, diversos grupos sociales hicieron público su juicio sobre el desempeño del gobierno al completarse sus dos primeros años de gestión, unos mediante pronunciamientos formales, otros mediante declaraciones de sus dirigentes. En conjunto, estas evaluaciones fueron extremadamente negativas, cualquiera fuera el ámbito social o político del que surgieran. Las únicas excepciones las constituyeron el juicio del Partido Demócrata Cristiano, el de los voceros del gobierno norteamericano y la apreciación de algún jerarca de la Iglesia católica, quizá más atento a las declaraciones de principio que a los hechos, a las intenciones programáticas que a las realizaciones objetivas.

La evaluación más virulenta fue la realizada por el partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, que hizo público un comunicado con el título “Dos años de desgobierno democristiano.” El comunicado, escrito en un estilo plagado de adjetivaciones insultantes, puede sintetizarse en tres puntos: (1) los dos años de gobierno han constituido un “abuso constante del poder político, económico y social de la República,” del que

el Partido Demócrata Cristiano se apoderó “llevado por muy poderosas fuerzas económicas y políticas foráneas;” (2) “el régimen duartista ha sido el gran violador de las leyes;” lo que hace de “Duarte y sus compañeros de ruta... los principales instigadores y actores de los procesos que han ido hundiendo y envioldiendo al país desde marzo de 1980,” e incluso les hace “culpables en gran parte de la violencia que se vive en el país;” y (3) frente al clamor popular, el régimen responde “con torrentes de propaganda.”

Es difícil pensar que algún otro grupo político fuera de ARENA o de las fuerzas económicas que lo apadrinan hubiera podido publicar en la prensa cotidiana un comunicado de semejante virulencia antigubernamental. Y, sin embargo, el comunicado de la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS, sin recurrir a exabruptos ofensivos, resulta objetivamente mucho más crítico ya que realiza un análisis sectorial del desempeño del gobierno, y los hechos tienen una fuerza evaluativa mucho mayor que los adjetivos.

El pronunciamiento de la UNTS parte de una referencia a la crisis del país y a la oferta electoral de la Democracia Cristiana y del Ing. Duarte de resolver los problemas del pueblo salvadoreño. La UNTS compara la situación actual con la de dos años antes en los ámbitos económicos, social, político, laboral e internacional. En lo económico, subraya la pérdida de poder adquisitivo del colón, la disminución de puestos de trabajo, el estancamiento de las reformas y, sobre todo, el impacto negativo del “programa de estabilización y reactivación económica,” que ha depreciado más todavía los salarios de los trabajadores frente al elevado incremento del costo de la vida, incluido el de los productos básicos. En lo social, la UNTS señala el deterioro en la salud, educación y vivienda al dedicarse una parte cada vez mayor del presupuesto nacional a la defensa y seguridad pública. En lo político, la UNTS considera que se han dado decretos represivos y perseguido a quienes no apoyan al gobierno, se ha incumplido el “pacto social” firmado por la Democracia Cristiana con la Unidad Popular Democrática, y no se ha avanzado en el diálogo. En lo laboral, para la UNTS la práctica del Ing. Duarte “ha sido tan negativa que, en la historia de El Salvador, su gobierno se perfila como el número uno en materia de represión contra los sindicatos y gremios:” despidos masivos, asalto militar o militarización de centros de trabajo, negativa a conceder personerías jurídicas, formación de organizaciones paralelas, persecución y difamación contra dirigentes sindicales. Finalmente, la UNTS opina que, en política exterior, el gobierno del Ing. Duarte se ha preocupado más por los intereses del gobierno de Estados Unidos que por los intereses del pueblo salvadoreño, comprometiendo así la soberanía nacional. La UNTS termina su pronunciamiento proponiendo una serie de medidas, desde la

derogación de las medidas del “paquete” económico hasta la recuperación de la soberanía nacional.

3. Los arboles y el bosque de la gestión gubernamental

Para evaluar adecuadamente los dos años de gestión del gobierno democristiano, hay que establecer con claridad las premisas y criterios que se van a seguir. Ante todo, es necesario recordar que, para el Ing. Duarte, ésta constituye su segunda gestión presidencial, puesto que la primera la realizó como cabeza de una Junta de gobierno militar-democrristiana. En ambos casos, las circunstancias excepcionales del país han representado al mismo tiempo un obstáculo y una ayuda para su quehacer gubernamental, ya que si los problemas enfrentados han sido de una gravedad anormal, el gobernante ha podido también echar mano de recursos extraordinarios. Con la Junta, Duarte gobernó mediante decretos-ley, algunos de los cuales marcaron trágicamente la historia salvadoreña; y, desde este segundo año de su segundo período, Duarte ha podido contar con una cómoda mayoría en la Asamblea Legislativa que, en principio al menos,



le han permitido sacar adelante todas aquellas iniciativas para las que realmente tenía voluntad política o las que, con el régimen sociopolítico imperante y dado su poder real, le era posible alcanzar.

En segundo lugar, el protagonismo personalista con el que Duarte lleva adelante su gestión presidencial, hace casi inevitable el que se le atribuya a él personalmente la responsabilidad tanto de lo bueno como de lo malo realizado por el gobierno. Sin embargo, eso no quiere decir que sea Duarte quien en realidad decida todos los asuntos de la política y la guerra, ni siquiera los más importantes y quizás éstos menos que ninguno. Esta afirmación no pretende reducir el papel de Duarte al de una simple marioneta, pero sí resaltar desde el principio el abismo al contraste entre su discurso y su acción, entre su autonomía verbal y su dependencia política.

Los criterios fundamentales para evaluar el desempeño del gobierno deben ser tres: (a) la situación actual comparativa de los principales problemas que enfrenta El Salvador; (b) el logro de los objetivos trazados por el propio gobierno; y (c) el impacto de las fuerzas externas, fuera del control nacional, que afectan esencialmente la marcha de los procesos.

Todas las evaluaciones realizadas sobre los dos nuevos años de gobierno de Duarte arrancan de un diagnóstico más o menos explícito de la situación del país, sus principales problemas y causas. El diagnóstico de Duarte se basa en la distinción entre las causas de la crisis conflictiva de El Salvador, por un lado, y las de la guerra, por otro. Esta distinción es válida en cuanto que, por ejemplo, poner término a la guerra no significará haber resuelto el conflicto social que divide a los salvadoreños; pero resulta falsa y engañosa cuando se utiliza simplemente para negar que la razón última de la guerra siga estando en la persistencia de la explotación y de la injusticia (es decir, en el conflicto social), y que se trate más bien de una imposición de "Rusia (¿la Unión Soviética?), Cuba y Nicaragua." Esta frase constituye un juicio estereotipado, muy propio del vocabulario simplista de la administración Reagan que lo utiliza para su particular confrontación ideológica con los fantasmas del comunismo internacional, pero que en nada ayuda a entender la realidad del país.

La negación implícita de que la guerra siga teniendo su principio último en las condiciones sociales aún vigentes en el país (y quizás hoy más que nunca) sirve de apoyo al militarismo a ultranza del actual gobierno norteamericano y al militarismo obscuro del gobierno salvadoreño, no por negado menos real, que supeditan en la práctica cualquier solución política del conflicto a la aniquilación previa y total del movimiento insurgente o a su rendición incondicional. La opción militarista impuesta por Estados Unidos constituye, en último término, la gran trampa en que ha caído el gobierno de Duarte y que, de no

mediar un pronto y radical cambio de timón, va a llevarle hasta el término de su mandato constitucional sin haber podido lograr lo que él mismo ha fijado como su máxima prioridad: la paz. Y no ya la paz social, que requiere solucionar las causas últimas del conflicto, pero ni siquiera la paz bélica, es decir, el poner término a la confrontación militar. Con razón un reciente estudio publicado en "NACLA Report on the Americas" ha podido calificar a Duarte como "prisionero de guerra," una guerra que para Estados Unidos apenas representa un "conflicto de baja intensidad," pero que está llevando a El Salvador al borde de la viabilidad histórica. Por eso resulta tanto más significativo que el gran promotor de la guerra salvadoreña, el actual gobierno de Estados Unidos, no aparezca ni siquiera mencionado en el discurso de Duarte.

El tener que asumir la victoria militar en la guerra como prioridad absoluta, aunque implícita, explica el que, en ningún momento, Duarte haya ofrecido al país un programa integral de gobierno. Más aún, los cinco objetivos que presentó como horizonte de su gestión (la humanización, la pacificación, la democratización, la participación y la reactivación económica) han sido de hecho supeditados al logro del triunfo militar y definidos en cada momento de acuerdo a las exigencias cambiantes de la guerra.

El caso más claro sobre la hegemonía política de la opción militarista lo constituye la economía del país. La guerra, es bien sabido, se come cerca de la mitad del presupuesto nacional, ello sin contar ese presupuesto militar paralelo que llega desde Washington, a veces revestido con ropajes de "ayuda humanitaria." El mismo Duarte reconoce en su discurso que "la guerra engendra miseria." Pero, mal que le pesara, a la hora de definir un programa que relanzara la economía, como pretendía hacerse con el "programa de estabilización y reactivación económica" puesto en marcha en enero de 1986, la guerra volvió a constituirse en el criterio fundamental.

A nadie se le ocultaba la necesidad de definir una política económica más austera y aun de establecer una serie de medidas fiscales y financieras que permitieran un cierto relanzamiento de la actividad económica del país. Sin embargo, en el momento de definir esa política fue la guerra y, más que la guerra, la búsqueda de una victoria militar, la que impuso sus términos. El resultado hasta el momento ha sido que, en lugar de recibir una ayuda y un estímulo, el pueblo salvadoreño ha recibido lo que se ha calificado como un "paquetazo económico." Se establecieron aquellas medidas necesarias para sufragar los gastos de la guerra y en función de seguir manteniendo el objetivo de la victoria militar, y se pidió al pueblo, principalmente a los sectores más humildes, un nuevo esfuerzo en aras no de la paz, sino de la guerra; se apretó aún más la tuerca de las economías familiares



sin más perspectivas que la de contar con más rifles para matar o más helicópteros para destruir. La ola de protestas populares que siguió a la implantación del “paquetazo” fueron simplemente el desbordamiento de una situación de ahogamiento económico, cada vez más insostenible. Como certeramente señala la evaluación de la UNTS, el programa ha acelerado el proceso de inflación y la pérdida de poder adquisitivo del colón frente a la subida de los productos fundamentales de la canasta básica, “llevando aceleradamente a nuestro pueblo a una situación de hambre y miseria.”

La guerra ha marcado también los límites al proceso de democratización y todavía más al de participación política y social. Mes con mes desde marzo de 1980 se renueva en el país el “estado de sitio,” que anula algunos de los derechos ciudadanos fundamentales contemplados en la Constitución y que ofrece el marco jurídico en el que se amparan prácticas de “seguridad” claramente violatorias de los derechos humanos. La continua vigencia del Decreto 50, cobertura legal de secuestros (detenciones por “hombres vestidos de civil fuertemente armados,” que luego resultan ser miembros de los cuerpos de seguridad) y torturas, cuando no de asesinatos y “desapariciones,” es el mejor mentís práctico al establecimiento de un estado pleno de derecho, del que en su discurso pretende ufanarse Duarte.

Es innegable que se ha ganado espacio para el quehacer político, lo cual es de alabar. Se ha superado, parcialmente al menos, el clima de terrorismo estatal que imperó en forma generalizada durante el anterior período de gobierno de Duarte (y del cual nunca ha mostrado intención alguna de rendir cuentas al país). Han disminuido las denuncias de torturas físicas y, cierta-

mente, el número de desaparecidos. Se es hoy más tolerante con ciertas manifestaciones de disidencia política, al menos con aquellas a las que no se puede tildar de tener vínculos con los insurgentes. Todo ello ha permitido la expresión de algunas voces discordantes por los medios de comunicación y, sobre todo, la actividad reivindicativa de los sindicatos y movimientos laborales, que han vuelto a hacerse presentes en las calles de la capital. Hasta aquí cabe hablar de una apertura del régimen, de espacios para el quehacer democrático de cada día, mucho más importante que las simples votaciones.

Sin embargo, no cabe llamarse a engaño sobre los límites de esta apertura democrática; y los límites, una vez más, los fija la guerra, la búsqueda de una victoria militar sobre los insurgentes. Se sigue practicando la tortura sistemática, aun cuando hayan cambiado sus modalidades de los métodos físicos a los psicológicos; sigue habiendo un número abrumador de "desapariciones" y asesinatos políticos, menor sí que el de 1981-1982, pero mucho mayor que el que en 1979 ganó para El Salvador la condena universal y justificó el golpe de estado; se ha incrementado el número de detenciones, con o sin cobertura legal, que mantienen las prisiones del país permanentemente hacinadas con presuntos partidarios o simpatizantes del FMLN; se ha tratado de ahogar todo movimiento sindical crítico, amedrentando o comprando a sus dirigentes, amenazando o dividiendo a sus bases; se ha intensificado la campaña de desprestigio moral y hostigamiento físico contra aquellas instituciones humanitarias o aquellos organismos defensores de los derechos humanos que se han esforzado por mantener su independencia y no han aceptado someterse a los planes de contrainsurgencia gubernamental; se han multiplicado los bombardeos sobre zonas en las que, de hecho, vive población civil, sin consideración alguna para sus vidas ni sus recursos; se ha desplazado en forma violenta y masiva a pueblos enteros de sus lugares de vivienda, con el fácil expediente de que se trataba de "masas" y con la ofensiva pretensión adicional de considerarlos "rescatados."

La lista de violaciones a los derechos humanos y de condiciones antidemocráticas podría multiplicarse. Pero no se trata ahora de abundar en las lacras del régimen; de lo que se trata es de examinar si los dos nuevos años de gobierno de Duarte las ha combatido eficazmente o no. Un análisis somero de los párrafos anteriores pone de manifiesto que, si bien se ha avanzado en ciertos aspectos, también se ha retrocedido en otros y, en conjunto, no puede decirse que se haya producido un cambio sustancial y mucho menos esencial. El Salvador y los derechos básicos de su pueblo siguen estando al arbitrio de las exigencias de la guerra, el proceder de la Fuerza Armada, tanto del ejército como de los cuerpos de seguridad, sigue siendo intocable e incriticable, el sistema de justicia sigue con las mismas cegueras, parialidades e impotencias que lo han vuelto inoperante y aun

cómplice de los males del país. Por si hiciera falta algún ejemplo notorio y reciente de este juicio, el caso de los "secuestradores" serviría como su mejor confirmación: tras una gran alharaca publicitaria y un conato de justicia, todo quedó en un par de detenciones benignas, unos oscuros asesinatos y un bochornoso silencio, muy relacionado al parecer con el lucrativo negocio del cambio de dólares.

Resulta casi ridículo si no ofensivo hablar de las "impresionantes realizaciones" sociales del gobierno actual, cuando se mira la situación concreta en que se encuentra el pueblo salvadoreño. Si algo impresiona es más bien la parálisis que aqueja toda política eficaz para detener y aun paliar el deterioro continuo de aquellas condiciones que, en el propio análisis de Duarte, son las raíces últimas del conflicto. En El Salvador hoy hay más hambre, peor salud, menos vivienda, menos y peor educación, mucho más desempleo y, en conjunto, más miseria y tanta o más injusticia que la que había en 1979. Ello no es el resultado de las reformas iniciales desde el golpe de estado como pretenden los voceros de la oligarquía, sino el resultado de la agudización de la crisis del sistema social del país y, últimamente, de los estragos de la guerra. Sería no sólo injusto, sino erróneo, atribuir al gobierno de Duarte la causa de todos los males que agobian al pueblo salvadoreño; tan injusto y erróneo como eximirle de su parte de responsabilidad o justificar su inoperancia por la magnitud de los problemas que confronta. Porque, de hecho, frente a lo que prometió y a lo que se comprometió (por ejemplo, en su "pacto social" con la Unión Popular Democrática), Duarte ha gobernado de espaldas a los intereses y clamores populares, más atento a ganarse el apoyo del gran capital, a mantener contentos a los militares o a articular las exigencias norteamericanas, que a dar respuesta a las necesidades de aquellos mismos que le llevaron a la presidencia. Por eso, la única política consistente de Duarte ha sido la de la guerra. A su gobierno no se le puede pedir que resuelva en dos años los problemas seculares del país; pero sí se le puede y debe exigir que ponga fin a una guerra que es, hoy por hoy, la condición que más gravemente afecta al pueblo salvadoreño y que más contribuye a deteriorar sus condiciones de vida sin por ello alterar las estructuras básicas que han mantenido su opresión histórica. Y, en esto, los dos nuevos años de gobierno no sólo no han supuesto un avance, sino que han representado un positivo retroceso: El Salvador está hoy más lejos de la paz que lo que lo estaba en 1984. Por eso se afirmaba antes que la guerra representa la gran trampa en que se encuentra empantando el gobierno de Duarte. La guerra está abonando las mismas raíces de donde surge: la miseria, el sistema de dominación, las estructuras de injusta distribución.

Es cierto que el actual gobierno ha logrado no su propia consolidación, sino la consolidación de un esquema que respon-

de al proyecto norteamericano para el país: un esquema de democracia formal, donde actúan unos partidos políticos, representantes de unos intereses concretos, y donde periódicamente se acude a las urnas para depositar un voto por alguno de los candidatos. Pero con ello no parece haberse ganado mucho respecto al régimen imperante en el país hasta 1979; también entonces había partidos, incluso con más diferencias entre sí que las que ofrecen los actuales, y también entonces se acudía a elecciones, menos libres quizás, pero no con menos opciones que las que se han realizado desde entonces. Y es que el problema fundamental de El Salvador, como el de tantos otros pueblos de Centroamérica y de toda la América Latina, no es un problema de democracia formal, sino de democracia social, es decir, de desarrollo y justicia. Lo que el pueblo salvadoreño necesita no es tanto decidir un día quién será su gobernante entre una lista de candidatos, sino contar con el poder para decidir cotidianamente su propio destino; lo que hace falta no es tanto una participación formal en los procesos electorales, sino una participación real en los procesos productivos y, sobre todo, en el disfrute de los bienes producidos. Ciertamente, lo uno no se opone a lo otro e incluso cabe pensar que son realidades complementarias. Pero es ingenuo pensar que la democracia formal pueda producir otro fruto que el de consagrar a quienes tienen el poder cuando no existe democracia social. La democracia formal, para ser democracia real, exige la posibilidad de participación en condiciones competitivas, de equiparabilidad del poder, sólo reales cuando existen unos mínimos de justicia social.

Tras dos años de gobierno, Duarte no ha logrado avanzar en la solución de ninguno de los problemas cruciales del país: se



han deteriorado las condiciones básicas de miseria e injusticia que están a la raíz del conflicto, no se ha conseguido establecer un régimen de libertades y garantías suficientes como para que los salvadoreños que no están de acuerdo con el poder establecido puedan participar efectivamente en la vida pública, los poderes fácticos siguen procediendo en la práctica según sus intereses particulares y no según las necesidades de las mayorías o las exigencias de la justicia, aún se dan gravísimas violaciones a los derechos humanos más fundamentales y, sobre todo, estamos más sumidos que nunca en la guerra civil.

Por si esto fuera poco, el actual gobierno de Duarte ha pig-norado la soberanía nacional a la actual administración de los Estados Unidos, convirtiendo bajo muchos respectos al país en una colonia norteamericana. El gobierno de la Democracia Cristiana no sólo ha terminado por plegarse en forma casi total al proyecto político norteamericano que tiene como prioridad máxima la guerra de aniquilación contra el FMLN, sino que ha mostrado una total dependencia de Estados Unidos para su política internacional, hecho tanto más deplorable cuanto más importacia ha tenido esa política para los destinos de El Salvador. Este ha sido concretamente el caso de las negociaciones de Contadora, en las que el gobierno salvadoreño ha estado más atento a servir de instrumento para la política de Reagan contra Nicaragua que a buscar la defensa de los intereses nacionales. Sólo así se explica que, tras proclamar a Contadora como "su" doctrina, a la hora de firmar diera una vergonzante marcha atrás a fin de no respaldar la legitimidad del gobierno nicaragüense, lo que hubiera comprometido la presencia norteamericana en Honduras y su apoyo a la guerra de los "contras," condenado por el más alto tribunal internacional, la Corte de La Haya.

La conciencia más o menos clara de lo pobre del balance de su gestión gubernamental fue probablemente la razón primordial que llevó a Duarte a terminar su discurso con un apéndice totalmente sorpresivo e improvisado, pero del que sabía que respondía al sentir popular: el llamado a una tercera ronda de diálogo con el FDR-FMLN. El que fuera improvisado no significa que fuera injustificado, y el que fuera sorpresivo no significa que fuera irracional. Duarte no podía ignorar no sólo su baja de popularidad (lo mostraban sus propias encuestas) o la creciente presión incluso entre las bases de su partido por una política de paz; más a fondo, no podía desconocer lo pobre de sus realizaciones gubernamentales, sobre todo de cara a los problemas fundamentales del país, y que el tiempo de su mandato va transcurriendo sin que ni siquiera la guerra parezca prelu-diar un fin.

Como en el caso anterior, el llamado al diálogo apareció como la varita mágica que le situaría de nuevo en el candelero po-

pular de demócrata y luchador por la paz. Sólo que en esta oportunidad la pronta y madura respuesta del FDR-FMLN puso de manifiesto lo improvisado de su propuesta obligándole una vez más a recurrir a los lugares comunes que le permitieran ganar tiempo político. Pero eso ya es historia para el tercer año de su nueva gestión gubernamental. Un año que, de seguir la tónica de los dos últimos, hundirá todavía más a El Salvador en la guerra y en la sumisión a las conveniencias de Estados Unidos, y hará más patente todavía la impotencia política de Duarte para guiar al país hacia la libertad y la democracia, la justicia y la paz.

